

**COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

(Sesión celebrada el día 4 de julio de 2019).

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 15:10).

—Damos la bienvenida al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro; al subsecretario, Jorge Loustaunau; a la subdirectora general, Laura Bajak; a la subdirectora nacional de trabajo, Cristina Graciela Fernández y al asesor, doctor Álvaro Rodríguez Azcúe.

Quiero decirles que desde hace un tiempo veníamos analizando en nuestra comisión algunas iniciativas que provenían del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Una de ellas tiene que ver con la reforma de la Caja Notarial, que está a estudio de esta comisión y que, si bien su debate está parcialmente detenido, su consideración está bien avanzada, porque falta concretar cuatro o cinco artículos. Uno de los senadores, integrantes de la comisión, planteó analizar una cuestión de inconstitucionalidad y este es uno de los motivos por el que estamos convocando a nuestros invitados, concretamente para que nos den su opinión al respecto. Nosotros tenemos, al menos, tres informes de la propia Asesoría Jurídica del Parlamento, que tiene una versión de la Caja Notarial y de la Asociación de Jubilados de la Caja Notarial que nos hicieron llegar sus distintas apreciaciones sobre el asunto.

El segundo tema en discusión, a iniciativa de diversos integrantes de la comisión, tiene que ver con el análisis de la marcha de la situación conflictiva en la empresa Petrobras. Quisiéramos saber en qué etapa de la negociación está el conflicto y poder intercambiar puntos de vista.

El tercer tema tiene que ver con la reciente conferencia anual de la OIT, en cuya agenda estaba colocada la denuncia del sector empleador de nuestro país. Luego, la propia conferencia decidió incorporarlo en el orden del día, con las consecuencias del análisis del caso Uruguay y las conclusiones que nos han llegado y que el propio Ministerio de Trabajo remitió a este Parlamento.

Entonces, convocamos a nuestros invitados para conocer cuál es la opinión que tienen sobre estos tres temas.

(...)

(Se omiten las referencias a tratamiento de los temas no vinculados con la OIT)

SEÑOR MINISTRO.- Quisiera manifestar, antes de pasar al último punto a tratar, que a las 17:20 horas tendría que retirarme porque tengo un compromiso con una actividad que hacemos en el ministerio con el contador Enrique Iglesias y el exsecretario de la seguridad social española, Adolfo Jiménez, pero si fuera necesario para continuar la conversación, el resto de la delegación puede permanecer.

En relación al tema OIT nos permitimos traer unas copias, señor presidente, de la presentación que hizo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 14 de junio en la OIT, en ocasión de discutirse en la Comisión de Aplicación de Normas de ese organismo el caso 2699, referido a Uruguay y la queja del sector empresarial. En ese documento, en nuestra opinión, están sintetizados todos los elementos fundamentales de la posición del Gobierno uruguayo respecto a este tema y queremos hacer dos o tres precisiones muy importantes.

En primer lugar, el Gobierno uruguayo va a cumplir con las conclusiones que ha tomado la comisión de normas el 17 de junio; no cuestiona a los organismos de la OIT y queremos destacarlo expresamente. Por ejemplo, podría decirse que hay una contradicción porque el sector empleador sí los cuestiona. El discurso que realizó el sector empleador en la conferencia cuestionó a los organismos de

control de la OIT; nosotros no lo hacemos ya se trate de la comisión de normas, de la comisión de expertos en la aplicación de normas de la OIT o del comité de libertad sindical. Nosotros podremos estar de acuerdo, más o menos de acuerdo, podremos tener diferencias, pero respetamos los órganos de la Organización Internacional del Trabajo.

Hago este señalamiento porque para nosotros también es importante que el Uruguay como país, a través de su gobierno, no cuestiona a los organismos de la Organización Internacional del Trabajo, como sí lo han hecho otros gobiernos en relación a sus casos o a otros casos, o como lo han hecho los empleadores del mundo o de Uruguay.

En segundo lugar, en los últimos años y particularmente con esta Administración desde 2015, hemos tomado el tema con la mayor seriedad y con intenso trabajo, creando grupos de trabajo tripartitos, presentando propuestas y buscando atender las observaciones o recomendaciones que nos han hecho. Además, buscamos atender los planteamientos del sector empresarial y del sector trabajador, de acuerdo a la Constitución uruguaya, a las leyes y de acuerdo a las normas de la OIT. Por ejemplo, en la OIT para el sector empleador mundial el derecho de huelga está cuestionado. El sector empleador internacional entiende que el derecho de huelga no está consagrado por la OIT. Esta es una clara contradicción al artículo 57 de nuestra constitución y lo pongo como ejemplo de las diferencias conceptuales que se tienen en los temas que se discuten en la OIT. Cuando se va a discutir el derecho de huelga, el sector empresarial se niega directamente y ese es un derecho constitucional de nuestro país que creo que todos respaldamos.

En tercer lugar, hicimos público ese documento que presentamos ese mismo día en la OIT y lo traemos hoy a esta comisión y la semana pasada lo llevamos a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. Hemos señalado con el mayor detalle cuál es la posición que tenemos al respecto. En este sentido, el gobierno va a cumplir con las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT. Por ejemplo, hoy es 4 de julio y la conferencia de la OIT culminó el 21 de junio, hace quince días. El 26 de junio hicimos la primera reunión tripartita con empresarios y trabajadores –por los primeros estuvieron presentes los presidentes de la cámara de industria, la cámara de comercio y asesores, y por el PIT-CNT estuvieron el presidente y el secretario general–, para considerar este tema en particular y los otros puntos que resolvió la OIT, que fueron muchos. Recordemos que fue el año del centenario de la OIT, hay una declaración y un documento sobre el futuro del trabajo muy importante. También se aprobó el convenio n.º 190 sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo, el que nos gustaría informar a esta comisión porque también estamos trabajando sobre él. Asimismo, se aprobó la recomendación n.º 206 también sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo. Queremos ser de los primeros países del mundo en aprobar el convenio, como lo fuimos con el anterior convenio el n.º 189 que fue aprobado en el año 2011 sobre el trabajo doméstico. Fuimos el primer país del mundo en ratificarlo. Convenio que es reconocido por la OIT que se inspiró, entre otras fuentes, en la legislación uruguaya de trabajo doméstico, la Ley n.º 18065. En estos días hemos trabajado en todos estos temas.

En la reunión tripartita se consideraron las conclusiones de la OIT con relación al caso Uruguay, que refieren exclusivamente a la ley de negociación colectiva. Este es otro aspecto importante, las conclusiones de la OIT son exclusivamente sobre eventuales modificaciones a la ley de negociación colectiva, no sobre otros temas que el empresariado uruguayo y el empresariado internacional llevaron a la OIT. Y sobre esto quedamos en que vamos a trabajar. En la reunión del 26 de junio hicimos una propuesta de plan de trabajo que fue unánimemente aprobada que es reunirnos como máximo cada 15 días –a próxima reunión es la semana que viene, el 10 de julio–, y partiendo de la base de que el Gobierno se ha comprometido a cumplir con las conclusiones de la comisión de normas adoptadas el 17 de junio, vamos a trabajar intensamente y de buena fe por ese camino. Destaco nuevamente que hemos encontrado, tanto en el sector trabajador como en el empresarial, una buena actitud a trabajar más allá de las diferencias existentes en ese sentido.

Quiero destacar que esta reunión del 26 de junio la acordamos con los presidentes de la cámara de industria, la cámara de comercio, y el presidente y el secretario general del PIT-CNT antes de conocerse las conclusiones de la OIT al respecto. Es decir, no sabíamos cuál iba a ser el resultado y antes de eso ya dijimos: «De cualquier manera el 26 de junio nos reuniremos para ver cómo trabajamos en este y en los otros temas muy importantes que fueron considerados en la conferencia».

También acordamos empezar a trabajar en el proceso de ratificación del convenio de acoso y violencia n.º 190 aprobado en esta conferencia n.º 108 del centenario de la OIT y ayer se concretó la primera reunión tripartita para tratar el tema. Se cita en función del convenio n.º 144 de la OIT. Es un problema mundial que está, lamentablemente, en crecimiento y estamos tratando de que Uruguay sea –como ya lo dijimos– uno de los primeros países del mundo en aprobar este convenio n.º 190 y la recomendación.

Con relación a los temas de la queja del Caso 26/99, relativas a la Ley de Negociación Colectiva, en nuestra opinión, en el documento que les hemos entregado tienen todos los fundamentos de lo que pensamos al respecto y de lo que podría hacerse.

Estuvimos, estamos y estaremos dispuestos, mediante el diálogo y la negociación colectiva, a hacer modificaciones a la Ley de Negociación Colectiva, la Ley n.º 18566. A vía de ejemplo señalamos las propuestas que hemos hecho en 2015, en setiembre de 2016 y en marzo de 2017. En particular, con relación a eventuales modificaciones a esa ley queremos citar las propuestas realizadas en 2015 y, sobre todo, la de setiembre de 2016.

Con respecto a esta última, consideramos que la mayoría de las observaciones y de las recomendaciones que hemos recibido por parte de la OIT y que fueron origen de la queja presentada en 2009 por el sector empresarial uruguayo, con el apoyo de la Organización Internacional de Empleadores, están resueltas en esa propuesta de setiembre de 2016. Lamentablemente, ella no fue aceptada por las cámaras empresariales en sendos comunicados que nos enviaron en julio de 2017, donde nos señalaron que esas propuestas no eran aceptables, que eran insuficientes y que estaban dispuestos a seguir dialogando al respecto. Sin embargo, luego de eso no fue posible concretar reuniones porque ellos ya habían decidido que iban a continuar con el caso en la Organización Internacional del Trabajo.

En opinión del Gobierno, del Poder Ejecutivo, de este ministerio, entendemos que la mayoría de las cuestiones presentadas por los empleadores están contempladas en esas propuestas, particularmente la de setiembre de 2016. Para eso me permito hacer un pequeño resumen. Estoy tomando como base un documento de la OIT del Consejo de Administración de marzo de 2010, en la 307.ª Reunión del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, que toma en cuenta el 356.º Informe del Comité de Libertad Sindical. Allí se establecía: « I) en lo que respecta al intercambio de informaciones necesarias a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva y que tratándose de información confidencial la comunicación lleva implícita la obligación de reserva, y su desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes incumplan (artículo 4), el Comité considera que todas las partes en la negociación, gocen o no de personería jurídica, deben ser responsables ante eventuales violaciones del derecho de reserva de las informaciones que reciban en el marco de la negociación colectiva». Esto está contemplado en la propuesta de setiembre de 2016.

En segundo lugar, el Comité de Libertad Sindical de la OIT hablaba de la integración del Consejo Superior Tripartito. Allí establecía: «el Comité considera que podría tenerse en cuenta un número igual de miembros por cada uno de los tres sectores». Ese aspecto ya fue resuelto por la Ley n.º 19027, del 18 de diciembre de 2012.

En tercer lugar, el Comité de Libertad Sindical señalaba que la determinación del nivel de negociación colectiva debería depender de la voluntad de las partes en relación a las competencias del Consejo Superior Tripartito. Esto ya está previsto en la Ley n.º 18566. También está prevista una solución en las propuestas de diciembre de 2015 y de setiembre de 2016 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En otro punto, en el informe de marzo de 2010, el Comité de Libertad Sindical de la OIT, establecía que todo convenio colectivo sobre fijación de condiciones para el empleo debía ser el fruto de un acuerdo entre las partes, tal como está previsto. El artículo n.º 12 de la Ley n.º 18566 establece que, indudablemente, las condiciones de empleo son fruto de la negociación entre las partes. Es decir que ni el Poder Ejecutivo ni el Ministerio de Trabajo pueden imponer condiciones de empleo.

En el quinto punto del informe se expresa –en función de un aspecto que planteó el sector empleador– qué sucede y cómo debería procederse, conforme a la legislación nacional, cuando no hay representación sindical en una empresa. En ese sentido, aclaramos que este tema fue resuelto en nuestras propuestas de diciembre de 2015 y de setiembre de 2016.

En el sexto punto, el comité solicita al Gobierno el cumplimiento de los temas relativos a las organizaciones más representativas de los trabajadores y de los empleadores, así como en lo que dice relación con el cumplimiento de las formas, que también están incluidos en nuestras propuestas de diciembre de 2015 y de setiembre de 2016.

Por otra parte, el séptimo punto refiere a lo que se ha denominado la ultractividad, o sea, el mantenimiento de la vigencia de las cláusulas una vez culminado un convenio colectivo o una resolución de consejos de salarios y qué pasa mientras se negocia un nuevo plazo. Nuestras propuestas de setiembre de 2016 y de marzo de 2017 también resolvieron eso.

Por lo tanto, entendemos que la mayoría de los puntos de la queja del Caso 26/99 están contemplados en estas propuestas que, lamentablemente, no fueron aceptadas por el sector empresarial. Por eso, reitero que estuvimos, estamos y estaremos dispuestos a trabajar con la máxima prontitud. Tan así es que, seguramente, somos de los pocos –o el único– países del mundo que cinco días después de culminada la conferencia de Ginebra convoca a una primera reunión para tratar su caso; que siete días después realiza un acto muy importante –a salón lleno– en el Ministerio de Trabajo para informar e iniciar el proceso de ratificación del Convenio n.º 190 y de la Recomendación n.º 206 sobre Violencia y Acoso Laboral; que quince días después organiza una primera reunión tripartita a efectos de cumplir con el Convenio n.º 144, y que fija un calendario de trabajo con un plazo máximo de quince días entre reunión y reunión para considerar el caso de Uruguay.

Estamos dispuestos a ampliar los contenidos de nuestra exposición, aunque entendemos que es suficiente con dejar el documento a los integrantes de la comisión. Por tanto, preferimos –si así lo entienden los señores senadores– escuchar sus comentarios y preguntas para no seguir abusando de su tiempo y permitir el mejor intercambio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Ministro.

Los señores senadores Mieres y Otheguy tuvieron que retirarse porque integran la Comisión de Asuntos Internacionales que justamente está sesionando en este momento.

SEÑOR DELGADO.- Voy a ser breve en este tema que es muy amplio y seguramente hablaremos de él en otras oportunidades.

En lo personal es muy importante empezar a hablar en este ámbito sobre este punto que no es nuevo. Hace mucho tiempo que en la OIT está arriba de la mesa y, más allá de las propuestas que me consta que el Gobierno y otros sectores han realizado para tratar de enmendarlo, en los hechos el tema sigue sin solución. A tal punto es así que Uruguay –que debe ser uno de los países que más recomendaciones de la OIT ha ratificado– está dentro de los veinticuatro países que estarían incumpliendo observaciones de la OIT en la aplicación de convenios internacionales de trabajo en la Comisión de Aplicación de Normas. Debo recordar que tanto esta comisión como el Comité de Libertad Sindical son órganos tripartitos en la Organización Internacional del Trabajo. Digo esto porque tampoco se trata de una burocracia internacional –la OIT es un organismo muy particular– de funcionarios que deciden tal o cual cosa, sino que existe una integración tripartita que estudia los casos y envían misiones técnicas. En este caso, la hubo para Uruguay y en febrero de este año vino la última en la que hubo una especie de intimación al Gobierno para que cumpla con las recomendaciones de la OIT en el cambio de la Ley de Negociación Colectiva. Luego se llegó a esta conferencia donde el Comité de Aplicación de Normas no solo incluyó a Uruguay en la lista de veinticuatro países para ser estudiados por incumplir las observaciones de la OIT en la normativa laboral sino que, además, existe un dictamen intimando al Gobierno uruguayo para que antes del 1.º de noviembre se presente un proyecto de ley que modifique y mejore –esta última expresión va por mi cuenta– la Ley de Negociación Colectiva vigente y además le pide una especie de reporte sobre la situación que deberá presentar antes del 1.º de setiembre del presente año.

Digo esto porque, que los trabajadores o empleadores cuestionen a los organismos de la OIT o a sus decisiones, están en todo su derecho. Me preocuparía más si el Gobierno uruguayo los cuestiona y me queda claro, que no lo hizo. El señor ministro fue enfático, lo valoro y es lo primero que hay que despejar: si se está cuestionando o no al organismo –en este caso la comisión de carácter tripartito– o la decisión.

Lo segundo que quiero señalar –vamos a ver el vaso medio lleno y no medio vacío– es que me quedo con eso porque empieza una etapa con plazos perentorios en la que el ministro se comprometió a cumplir con las observaciones del Comité de Aplicación de Normas de la OIT. Me parece que es una señal positiva y quiero que quede claro. En cuanto a la forma, obviamente tiene la derecha el señor ministro. Consta de varios puntos. Algunos fueron mencionados en la comisión entre los que se encuentran observaciones de la OIT a la Ley de Negociación Colectiva vigente. Tenemos algunas propuestas sobre este punto, pero queremos señalar que para nosotros es importante que se puedan incorporar las observaciones del mencionado organismo al derecho positivo uruguayo para mejorar y modificar la Ley de Negociación Colectiva.

En ese sentido, con el compromiso político y público que acaba de hacer el señor ministro, le digo que cuenta con nosotros. Más allá de que el propio organismo internacional exige un consenso social, voy a ampliar más el abanico y expreso que también se necesita un consenso político. En este

sentido, nos ponemos a disposición para trabajar en la modificación que mejore la citada ley incorporando las observaciones de la OIT.

Por mí parte, más allá del *racconto* del historial, es claro que Uruguay estuvo por primera vez en esta lista, lo cual no está bueno, como tampoco que haya observaciones públicas de un organismo tripartito como la OIT. Además, en el medio existe un convenio entre la Unión Europea y el Mercosur, en el cual hay una cláusula de cumplimiento de normas internacionales, particularmente, las laborales, por lo que nos comprenderían las generales de la ley poder cumplir con las observaciones de la OIT.

En definitiva, el Poder Ejecutivo dijo dos cosas que rescato: por un lado, que no se cuestiona a la OIT, los organismos ni las resoluciones; por otro, se va a cumplir con las observaciones. Para mí eso es suficiente y voy más allá. Quiero que el señor ministro sepa que nosotros vamos en la misma línea y nos gustaría, como partido político, poder participar y colaborar en las modificaciones de la ley de negociación colectiva.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queremos agradecer el informe resumido que brindó el señor ministro porque me consta, y a juzgar por todos los papeles que tiene, que es extenso. Si iba a dar lectura a todo, íbamos a requerir una extensión horaria. El señor ministro pudo gozar de la virtud de referirse en pocos minutos a un tema que ha llevado una cantidad de horas. Mientras la delegación uruguaya –compuesta en forma tripartita, con trabajadores, Gobierno y empresarios– estaba discutiendo y analizando estos casos en la conferencia de la OIT en Ginebra, las repercusiones de los medios de prensa acá fueron abundantes.

Nos comprenden las generales de la ley por tener directa relación con toda esta historia desde que volvimos a gozar de un sistema de negociación colectiva en el país. Quiero reivindicar eso. Quiero reivindicar dos cosas, no quiero cortar camino. Quiero terminar con la misma conclusión del señor senador Delgado, en cuanto a que en este ámbito nunca nos negaremos a discutir y a debatir para encontrar la mejor solución, la que permita a un sistema democrático gozar de un derecho en forma equitativa. Ojalá que siempre hubiese sido así. Pertenezco a la generación de trabajadores que no teníamos la posibilidad de negociar colectivamente y nosotros militábamos clandestinamente. Mi nombre figuraba en la lista negra; no nos daban trabajo por ser dirigente sindical. Ocurrió en este país y no en otro. Había empresas que brindaban servicios que tenían listas negras donde figuraban los dirigentes o militantes sindicales. Nosotros no podemos abstraernos de que esto ocurrió en el Uruguay y nadie levantaba la voz como lo hace el señor senador Delgado y otros legisladores del parlamento. Por lo tanto, aunque tengamos opiniones distintas, aunque confrontemos políticamente, estamos orgullosos de tener un sistema democrático que nos permite debatir y discutir.

Ahora bien, acá hay cosas que tienen que quedar absolutamente claras. El proceso de cómo tenemos la Ley n.º 18566 sobre el sistema de negociaciones colectivas en nuestro país está enmarcado en la iniciativa de un Gobierno del Frente Amplio

–partido político que integro–, que se había comprometido en la campaña electoral porque en los 14 años anteriores no hubo negociaciones colectivas, a pesar de que existía la norma. Y ahí no se levantaron voces. Obviamente, en algún momento ni siquiera hubo parlamento, por lo menos, elegido democráticamente; sí personas que usurparon esta Casa. Eso sí. Pero cuando se recuperó la democracia no se levantaban voces. Hubo un período desde el Gobierno del doctor Sanguinetti, luego en el Gobierno del doctor Lacalle, en el año 1991, que se dejó de convocar a los consejos de salarios. Y solamente negociaban colectivamente algunos de los gremios donde había precios tarificados o regulados, como las empresas lácteas, el transporte, la salud o el sistema financiero, dado el peso que tenía en nuestro país. De verdad, soy de la generación en la que había que pertenecer a un sindicato grande, pesado y con gran capacidad de movilización para obligar al sector empleador a sentarse a negociar.

También hay que decir eso porque, si no, parecería que estamos abstraídos de un mundo totalmente distinto, que no sé si lo sabe la OIT, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia o el Comité de libertad sindical, porque en ese momento no se expedían y no porque no denunciábamos. Las generaciones anteriores de dirigentes sindicales que construyeron la unidad sindical también denunciaban estas cosas. Es más; en la década de los setenta u ochenta denunciaban que acá desaparecían dirigentes sindicales. Todo esto ocurre en ese mismo lugar, en este mismo ámbito que estamos peleando nosotros.

Yo reivindico que nosotros tengamos una ley de estas características con todos sus contenidos. No estoy negando la posibilidad de que se cumpla con el compromiso que manifestó nuestro Gobierno de aceptar la sugerencia, la recomendación de la OIT para que busque el consenso posible entre los actores sociales, entre los empleadores y trabajadores. Cuando efectivamente lo logren –y si no lo logran que brinden el informe a la comisión– quiero que las autoridades de este Ministerio de Trabajo estén al tanto

de que yo voy a defender la ley tal cual está, para que no nos llamemos a sorpresa. No sé cuál va a ser el contenido, pero salvo que se logre un consenso unánime para alcanzar mayores beneficios para a los trabajadores, nosotros vamos a defender este sistema de negociación colectiva, porque nos parece lo mejor que hemos tenido en muchísimo tiempo. Creemos que es lo que ha posibilitado, efectivamente, a comenzar a distribuir mejor las riquezas que generan los trabajadores y trabajadoras y gozar así de derechos que antes no teníamos ante una generación importante de hombres y mujeres de este país. Aclaro que acá no siempre hubo vestuarios para mujeres y para hombres; no siempre hubo baños para mujeres y para hombres en los lugares de trabajo; no siempre hubo media hora de descanso; no siempre hubo una piecita para poder amamantar a los hijos; no siempre hubo licencia maternal. Todas estas cosas son conquistas que se fueron haciendo por parte de los trabajadores, a partir de valernos de un sistema de negociación colectiva como el que hoy tiene la sociedad uruguaya.

Me sabrán disculpar los señores invitados que a veces hablo en primera persona como si fuera un dirigente sindical, pero es muy difícil poder abstraerse después de tantos años de estar allí. Lo digo con pasión, pero con mucha sinceridad y respeto. Tenemos la misma vocación de confrontar ideas; confrontamos ideas y defendemos lo que sea mejor para la mayoría de nuestros compatriotas, escuchamos todas las opiniones, sin olvidar ninguna. Sin embargo, estamos en un período en el que los plazos son reducidos porque en este país van a ocurrir muchas cosas en los próximos meses. El plazo electoral hace que este Parlamento tenga actividad hasta mediados de setiembre y el señor ministro expresó que tienen hasta el 1.º de noviembre para entregar esos acuerdos.

Me sumo a las palabras finales del señor senador Delgado en el sentido de estar atentos y ayudar en lo que podamos, a esperar las propuestas o los consensos que ustedes generen y poder debatir allí.

SEÑORA PASSADA.- Antes que nada quiero decir que voy a tener que retirarme a otra reunión.

Creo que lo que decía el señor presidente es, justamente, el camino que nosotros tenemos que buscar. Hay un hecho que es real: algunos de los que estamos aquí en la mesa trabajamos en la construcción de esa ley y, justamente, cuando estábamos en la construcción de la propia norma hicimos hincapié en el instituto de la negociación colectiva. Este debate duró muchísimos meses y, realmente, pienso que nos encontramos en el mismo punto de quiebre de aquel entonces. Nada nuevo se está aportando a la discusión; estamos en el mismo punto. Digo esto porque los actores de esta mesa nos desempeñábamos en distintos lugares: por la mirada que dio el señor presidente desde el propio movimiento sindical y nosotros desde aquí, sentimos que la discusión que tuvo lugar sobre el tema fue muy fermental. En el ámbito de la comisión estaban representados todos los sectores y desde allí se hizo el mayor trabajo.

Quiero dejar constancia de que hoy está planteada la misma discusión sobre el mismo punto, sobre el cuestionamiento de la negociación y sobre el tema de las ocupaciones. Esta fue una discusión sobre la que, en 2008, no pudimos avanzar más allá y hoy volvemos a tener el mismo punto de quiebre.

Ahora bien, después de casi diez años hubo un proceso de trabajo. Yo podría pensar que en aquel momento se pudiera tener miedo sobre esa transformación de colocar una ley de negociación colectiva, pero creo que hoy no se puede poner en duda algunos hechos que son reales y la propia sociedad se ha apropiado. La negociación colectiva no es solamente lo que está plasmado en la ley, sino que es el diálogo social, permanente y tripartito. Esta es la base de la norma. Quería dejar sentada esta posición, consciente de las fuertes discusiones que tuvimos con el señor senador Iturralde en la comisión sobre esos dos puntos.

Me parece que la actitud que está teniendo nuestro Gobierno vuelve a colocar sobre la mesa que el camino es el diálogo y el tripartismo. En lo personal, hago un fuerte llamado para que el camino siga siendo el mismo, pues ello nos dará resultados que, podrán ser más lentos, pero serán los que tengan mayor fuerza.

Además, ¡no importa si se llega a noviembre, señor presidente! Nosotros estamos en condiciones de levantar el receso. El receso se levanta desde la comisión, en las propias sesiones, si existe la voluntad política de hacerlo, independientemente de que estemos en el mes de noviembre. Reitero que me parecería importante ir por ese camino.

Tal vez resulte contradictorio: estoy yendo casi once años para atrás, pero lo importante es que estamos todos firmes y en la misma postura.

SEÑOR MINISTRO.- Quiero comentar algunas cuestiones que considero importantes.

Hemos lamentado que Uruguay integrara esta lista. Hemos dicho que nuestro país no merece estar en esta lista –no lo merecía ni lo merece–, pero estas son cosas que se acuerdan sin participación alguna de los gobiernos del mundo. De todas maneras, creemos que hubo una intención a la hora de su inserción en ella.

Quiero aprovechar la oportunidad para decir al señor senador Delgado que no es la primera vez que el Uruguay está en la lista; ya lo estuvo antes. Por ejemplo –y si no me falla la memoria–, en 2002 o en 2003, estuvo cuestionado por lo bajo que era el salario mínimo nacional.

SEÑORA PASSADA.- Exacto.

SEÑOR MINISTRO.- Reitero que antes también había estado.

Quiero destacar un hecho que me parece positivo, no ya para el Gobierno, sino para el Uruguay. Recordemos que de la OIT participan casi ciento noventa países y ningún Gobierno del mundo cuestionó al Gobierno uruguayo. No hubo un solo Gobierno del mundo que hablara en contra de la posición del Gobierno uruguayo. Además la posición del Gobierno uruguayo tuvo apoyo –y creo que es un hecho destacable– de todos los trabajadores del mundo, de las más diversas orientaciones sindicales.

Lo otro que me parece importante y que tratamos de señalar en ese documento

–que ojalá los señores senadores consideren oportuno leer y tengan tiempo de hacerlo, dentro de sus múltiples ocupaciones– es que nos volvió a llamar poderosamente la atención que la queja se presentara sesenta y seis años después, teniendo en cuenta que la Ley n.º 18566 es más flexible, en cuanto al planteo de los empleadores, que la Ley n.º 10449, de 1943.

Sí tenemos muy claro lo siguiente. Comenzamos y terminamos nuestra exposición del 14 de junio, en Ginebra, diciendo –es este documento que ustedes tienen ahora– que estuvimos, estamos y estaremos dispuestos al diálogo y a la negociación para modificaciones convenientes, oportunas y razonables al sistema de negociación colectiva; queremos más y mejor negociación colectiva. Nosotros no estamos para reducir ni para eliminar la negociación colectiva y además reafirmamos el papel promotor del Estado en ella. Creemos que este tiene que ser un partícipe activo en la negociación colectiva, porque cuando el Estado no fue su promotor, disminuyó notoriamente o desapareció. Además lo muestran los números. Cuando el Estado tuvo una negociación colectiva como la del primer Gobierno democrático, como producto de los acuerdos de la Concertación Nacional Programática –entre los que estaba la reiteración de los Consejos de Salarios– se llegó a cifras muy importantes de trabajadores y empresas protegidas por la negociación colectiva y la cifra bajó al 10 % o 20 % de trabajadores protegidos cuando no había un Estado promotor de la negociación colectiva o esta no se incentivaba.

Creo que además hay una razón económico-financiera –que quizás convendría analizar– sobre la importancia de que el Estado esté en la negociación colectiva. Recuerden que desde 1989 las pasividades en Uruguay se ajustan según los salarios y creo que esa es una razón más para la importancia de la participación del Estado en la negociación colectiva.

Por último, quisiera hacer dos o tres precisiones. Una es que lo que concluye la comisión de normas es que debemos hacer una memoria de lo que estamos haciendo. Fíjense ustedes que en 15 días ya hicimos tres cosas, más dos comparecencias legislativas. Es decir que ya hicimos cinco cosas en este tiempo, así que la memoria va a ser buena para el 1.º de setiembre. Las comparecencias legislativas son parte del proceso de discusión y cumplimiento de las conclusiones de la comisión de normas y de la OIT.

Lo otro es que la OIT no nos habla de proyectos de ley, sino de iniciar medidas legislativas. Quiero subrayar esto porque no es lo mismo; en instancias anteriores algunos órganos de la OIT habían hablado de proyecto de ley y ahora hablan de iniciar medidas legislativas, en consulta con las partes y nosotros queremos avanzar lo más posible.

El otro aspecto que quiero informar a los señores senadores es que estamos en la negociación colectiva más grande de la historia del Uruguay. Han culminado 231 consejos de salarios, hay once que tienen que resolver, retroactivo al 1.º de julio, y diez para el 1.º de enero de 2020. De esos veintiuno hay seis que son reenganches porque hicieron convenios cortos o decretos cortos. Contrariamente a lo que se ha señalado, en los 231 consejos de salarios que han terminado hay 85% de acuerdo entre empresarios y

trabajadores. Ese porcentaje se compone de un 48% de acuerdos tripartitos y un 37% de acuerdos bipartitos. ¿Cuáles son los bipartitos? Son aquellos acuerdos en los que se ponen de acuerdo empresarios y trabajadores, por encima de los lineamientos del gobierno. Creo que esto confirma la fortaleza de la negociación colectiva y que se puede negociar bipartitamente, tal como lo dice la Ley n.º 18566. A su vez, solamente hemos tenido ocho decretos que, como saben los señores senadores, se hacen cuando no hay posibilidad de negociación. Destaco que fueron solamente ocho decretos en 231 consejos de salarios y que algunos de esos decretos tienen que ver con el sector rural. Lamentablemente –aprovecho la oportunidad para dar la primicia–, el Grupo 22 del sector rural ya nos ha comunicado que nuevamente las gremiales empresariales rurales no van a participar de la negociación. Ante la negativa anterior a negociar habíamos hecho un decreto por un año –podríamos haberlo hecho por dos o tres, pero lo hicimos solo por un año esperando a que recapacitaran, que se viera la evolución del sector rural y ahora volvieran a la negociación– pero esta semana me pidieron una reunión para comunicarme que ahora tampoco quieren negociar. Lo digo porque esta es la excepción; de 231 consejos de salarios que funcionaron, en 223 hubo negociación y solamente en ocho no pudimos hacerlo y entre ellos hay cuatro que son rurales. Reitero que esta semana vinieron a decirnos que tampoco quieren negociar y nosotros lo lamentamos profundamente. Les advertimos que esto nos llamaba profundamente la atención porque todas las demás cámaras empresariales del Uruguay lo hacen y hemos llegado a un 85% de acuerdo. Por lo tanto, en las próximas horas tendremos que hacer un nuevo decreto para este sector. Nosotros ya hemos convocado a los once grupos que tienen que negociar retroactivo al 1.º de julio y a fines de año estaremos convocando a los diez grupos que tienen que negociar con vigencia al 1.º de enero de 2020, que son los últimos de esta ronda, la mayor de la historia y que para nosotros ha culminado muy exitosamente.

SEÑOR ITURRALDE.– Dado que no integro la comisión, no había querido pedir la palabra pero simplemente quiero dejar la constancia de que el silencio no implica la aceptación. En el año 2008, en la Comisión Permanente –el señor senador Delgado también la integraba–, interpelamos al Ministro Bonomi y creemos que todos los argumentos que vertimos en ese momento siguen presentes. Además, presentamos un proyecto de ley donde se regulaban los mecanismos de la ocupación en determinados casos, haciéndolo en torno al artículo 57 de la Constitución de la república como un derecho gremial, no solo del sindicato.

Sería una extensa exposición la que podría realizar, pero quería señalar esto a modo de que el silencio no valga aceptación, sino que el que calla no dice nada.

SEÑOR MINISTRO.– En el año 2008 no estaba presentada la queja, se realizó posteriormente.

SEÑOR ITURRALDE.– Me refería al concepto de ocupación.

SEÑOR MINISTRO.– Quiero realizar otra aclaración. Este tema no fue tratado por la OIT, las cámaras empresariales lo presentaron en la organización, pero la OIT no trabajó este tema. Reitero que en el año 2008 no estaba presentada la queja.

También informo que posteriormente a ello, en diciembre de 2012 se aprobó –la cité antes– la ley n.º 19027 que corrigió alguno de los puntos que nos solicitaba el sector empleador con relación a la ley de negociación colectiva.

SEÑOR ITURRALDE.– No me refería a la ley ni a la observación de la OIT, sino al tema de la ocupación. Creo que si abrimos un capítulo para discutir eso, nos va a llevar por un largo camino.

Insisto: suele decirse que el que calla, otorga, pero yo creo que el que calla no dice nada.

SEÑOR PRESIDENTE.– Agradecemos la presencia de la delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

–«El Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social remite los cuadernillos intitulados: “Seguridad Social para Personas Trabajadoras del hogar en México: una propuesta” y “La fundación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (1942)”.

–Versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Nacional Alfredo Asti, sobre la OIT».

–No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Son las 17:22)